	TRIBUNAL SANCIONADOR	Fecha: 10/04/2019 Hora: 13:40 Lugar: San Salvador	Referencia: 2065-13
RESOLUCIÓN FINAL			
Documentos que anteceden:	El 23/08/2018 se recibió escrito firmado por Ricardo Arturo Salazar Villalta, Presidente de la Defensoría del Consumidor, a través del cual evacua la solicitud realizada mediante resolución de las 13:46 horas del 26/07/2018, agregando la documentación requerida (folios 51 a 53).		
I. INTERVINIENTES			
Denunciante:	Presidencia de la Defensoría del Consumidor		
Proveedoras denunciadas:	1) [Redacted], S.A. DE C.V., y 2) [Redacted] S.A.		
II. HECHOS DENUNCIADOS			
<p>La denunciante expuso que con fecha 12/03/2012, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC–, se practicó inspección en el establecimiento denominado “ [Redacted] ”, propiedad de la proveedora [Redacted], S.A. de C.V., a efecto de obtener muestras de producto. Como resultado de las diligencias realizadas, se levantó el acta respectiva, de la fecha antes relacionada (folios 3), en la cual se documentó la toma de muestra del producto denominado [Redacted], [Redacted] su presentación de 400 g, de la marca [Redacted], fabricado por [Redacted] (del domicilio de Guatemala) y distribuido por [Redacted].</p> <p>De lo constatado por la Defensoría del Consumidor se realizó el informe técnico realizado por el analista de seguridad y calidad, en la misma fecha de la toma de muestra y el informe de “Resultados del Plan de Verificación de Contenido Neto en Margarina Vegetal” (folios 5 a 8), en los que consta que el análisis de contenido neto realizado a la muestra arrojó como resultado que tres unidades presentaron ERROR T1, incumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 3.2. y 4.1.1. letra b) del Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” –en adelante RTCA 01.01.11:06–.</p>			
III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA			
A las proveedoras denunciadas se les atribuye la posible comisión de la infracción grave regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC—D.L. N° 776 del 31/8/2005, vigente al momento en que ocurrieron los hechos—, por ofrecer bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes.			
IV. CONTESTACIÓN DE LAS PROVEEDORAS DENUNCIADAS			
Durante el plazo de audiencia otorgado, las proveedoras denunciadas se pronunciaron según se expone a continuación:			





A. En razón de la prueba presentada y de la intervención realizada por el licenciado [redacted] mediante su escrito recibido el 21/5/2015, en resolución de las 13:46 horas del 26/7/2018 se tuvo por aclarado que el nombre completo de la proveedora [redacted] es [redacted], S.A., por lo que se decidió continuar identificándola con éste último nombre.

Específicamente sobre los hechos denunciados, el apoderado de [redacted], S.A. manifestó que el fabricante del producto objeto de la denuncia, lo elabora en la República de Guatemala, y utiliza balanzas electrónicas, las cuales en forma constante son calibradas, y para comprobar dicha situación adjuntó las certificaciones de calibraciones realizadas a las balanzas en los años 2011, 2012 y 2014. Asimismo, adjuntó un documento relativo al control de calidad de la producción realizado durante el período del mes de enero al mes de agosto de 2012, con lo que pretende probar que el peso de la Margarina [redacted] de 400 g, se encuentra dentro de los parámetros establecidos, es decir que el promedio máximo fue de 405 g y el mínimo de 400 g; y argumentó que le sorprende y extraña los valores que refleja la inspección, porque desconoce el tipo de balanzas que han sido utilizadas, si están calibradas y las condiciones ambientales en las que se realizó la inspección, pues la misma refleja contradicciones con los controles de calidad de la empresa que las produce, para lo cual también adjunta el diagrama de flujo de manufactura de margarinas.

Agregó que su representada, como distribuidora del producto, jamás tuvo intención de causar daño o perjuicio a los consumidores, y que dichos hechos no pueden afectar o perjudicar la salud de los consumidores.

B. Por parte de [redacted], S.A. de C.V., el Apoderado General Judicial de la misma (folios 32 a 35) manifestó que existe vulneración al derecho de audiencia y defensa de su mandante, puesto que la Defensoría del Consumidor ha impedido que su representada verifique que el análisis realizado haya sido de conformidad a las reglas y parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano "Cantidad de Producto en Preempacados" RTCA 01.01.11:06; y además, alega que se le ha impedido la posibilidad de controvertir y desvirtuar mediante prueba idónea el resultado que contiene el informe elaborado por la Defensoría del Consumidor, por lo que concluye que al haberse obtenido la prueba en violación a derechos de audiencia y defensa, ésta no debe surtir efectos.

V. SOBRE LAS VULNERACIONES ALEGADAS POR LAS PROVEEDORAS

1. Respecto a lo alegado por el apoderado de [redacted] en relación con las condiciones de las balanzas utilizadas para realizar el estudio de peso de los productos analizados, mediante resolución de las 13:46 horas del día 26/07/2018 (folios 40 a 42) se solicitó a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor que presentara la certificación previa de calibración de la balanza que fue utilizada en la prueba de metrología del 12/03/2012 en los productos objeto del presente procedimiento, documentación que posteriormente fue incorporada al presente expediente y que será analizada en la

valoración de la prueba para determinar si es pertinente y consecuentemente se pueda acreditar o no el resultado del informe de pesos realizado por la Dirección de Vigilancia de Mercado.

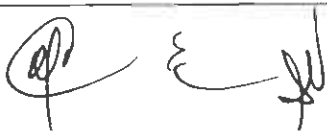
2. En cuanto a los argumentos del apoderado de _____, S.A. de C.V., es oportuno señalar que los mismos fueron analizados por este Tribunal en el auto de folios 40 a 42, postergando para esta oportunidad procesal lo relativo al vicio de la prueba oficiosa por la falta de oportunidad para que la referida proveedora pudiera verificar que el análisis de la muestra de producto realizado por la Defensoría del Consumidor fue efectuado conforme a la normativa técnica aplicable.

Al respecto, es menester aclarar que las inspecciones y estudios que son efectuados por los delegados de la Defensoría del Consumidor son realizados dentro del marco de las facultades que la LPC otorga a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, que delega dicha atribución con el objeto de velar por que se dé cumplimiento con lo regulado en la legislación de protección al consumidor, por lo que dichas inspecciones y análisis no tienen como objeto el inicio de un futuro procedimiento sancionatorio, sino que el fin perseguido es verificar que los distintos proveedores cumplan con lo regulado en la LPC y normativas técnicas, garantizando el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad, información, etiquetado, calidad, pesos y medidas de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado, tal como lo establece en el artículo 58 letra j) de la mencionada ley.

Así, mediante las inspecciones realizadas en los establecimientos, los referidos delegados pueden solicitar muestras de productos a los proveedores para la verificación del cumplimiento de la normativa de protección al consumidor, reglamentos y normas técnicas. De tales muestras, la Defensoría del Consumidor puede realizar los estudios y análisis con la finalidad de comprobar que dicho bien cumpla con todas las disposiciones —legales como técnicas— que le sean aplicables, situación que fue comunicada a la denunciada conforme a lo establecido en el acta para la toma de muestras de cantidad de Producto en Preempacados —folio 3— donde se consigna que *le explicaron a la coordinadora de abarrotes el motivo de la visita, la cual consistió en realizar compra de muestras de productos a los que se les realizarían pruebas acordes al Reglamento Técnico Centroamericano 01.01.11:06 "Cantidad de Producto en Preempacados"*.

Para el presente caso, la Unidad de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor siguió el procedimiento que establece el numeral 4. "Pruebas de referencia para los requisitos metrológicos" del RTCA 01.01.11:06, para verificar el cumplimiento de los productos en cuanto a su contenido neto, según se explica en el informe de "Resultados del Plan de Verificación de Contenido Neto en Margarina Vegetal".

De los resultados de la inspección y estudios realizados, los delegados deben informar de dicha situación a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, que tiene la potestad de presentar la denuncia respectiva, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de la LPC *el procedimiento*



sancionatorio inicia -en los casos de intereses colectivos y difusos o al tener conocimiento la Defensoría por cualquier medio- por denuncia escrita del Presidente de la Defensoría.

Por tanto, este Tribunal concluye que en el caso que nos ocupa no se configura ningún tipo de transgresión al derecho de defensa y audiencia alegado por el apoderado de () S.A. de C.V., por cuanto la autoridad denunciante y sus delegados, han actuado en ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones de inspección y control previamente conferidas por la Ley, y presentada la denuncia por posibles infracciones a la ley, este Tribunal le ha otorgado la oportunidad procesal de controvertir lo planteado en la denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, a fin de exponer los alegatos de defensa de los hechos atribuidos, junto con la presentación u ofrecimiento de la prueba de descargo oportuna y conducente, que pueda desvirtuar lo consignado en las actas de inspección así como el informe técnico, como lo ha hecho a través de su correspondiente escrito.

VI. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA

El artículo 27 inciso primero de la LPC dispone: “En **general, las características de los bienes y servicios** puestos a disposición de los consumidores, deberán proporcionarse con información en castellano, de forma clara, **veraz**, completa y oportuna, según corresponda, especialmente en los siguientes aspectos: (...) b) La calidad, **cantidad, peso o medida**, en su caso, de acuerdo a las normas internacionales, expresadas de conformidad al sistema de medición legal o con indicación de su equivalencia al mismo (...).” (El resaltado es nuestro). Asimismo, se establece que las exigencias especiales serán determinadas por las normativas de etiquetado, presentación y publicidad aplicables en cada caso.

Dentro de ese contexto, para el caso del contenido neto en productos preempacados en los diversos puntos de fabricación, distribución y comercialización, deben observarse las exigencias y requisitos que establece el Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06).

Y es que cada producto preempacado, previamente envasado o con cierre íntegro debe consignar en su etiqueta el contenido neto en unidades del Sistema Internacional (SI), cuyo dato debe ser veraz, siendo que **la cantidad nominal** –el valor declarado de contenido neto que aparece en la etiqueta– **debe corresponder al valor de la cantidad real** –cantidad que de hecho tiene el preempacado según las mediciones efectuadas por los estudios de metrología legal–. Además, deben tomarse en cuenta las tolerancias que la referida normativa técnica permite, para que de acuerdo al numeral 4.1.1 del RTCA 01.01.11:06, un lote se tenga por aceptado o rechazado, es decir, si cumple o no con la normativa de contenido neto de productos preempacados.

En virtud del derecho a una información veraz que tiene el consumidor sobre un producto preempacado, y que es dada a conocer a través de una etiqueta, el proveedor debe cerciorarse -en razón de la reglamentación técnica expuesta- que dicha información corresponde y es fiel con lo que realmente

se está poniendo a disposición en el mercado en cualquier nivel de distribución (número 3 del RTCA 01.01.11:06), pues caso contrario, es decir, que la cantidad nominal del producto no corresponde a la cantidad real como resultado de una experticia de metrología, configura la infracción prevista en el artículo 43 letra f) de la LPC (vigente al momento en que ocurrieron los hechos), el cual establecía que era una infracción grave *Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normativas técnicas vigentes*.

De lo anterior se desprende que dicha conducta ilícita se materializa por **ofrecer** bienes o productos que incumplan con las normas técnicas vigentes. Para el caso en específico, el término ofrecer a que hace reseña la ley se refiere al hecho de contar con una serie de bienes y productos dentro de un establecimiento con el ánimo de comercializarlos al público consumidor; puede también definirse, como el hecho de tener una diversidad de productos dentro de un establecimiento e invitar al consumidor a que los adquiera para su uso o consumo. Partiendo de la anterior premisa, el hecho ilícito tiene lugar cuando dentro de esa variedad de bienes que se ofrecen al consumidor se encuentran productos que al ser verificados respecto de las normas técnicas vigentes de etiquetado resultan con incumplimientos en la información que obligatoriamente debe consignarse en la etiqueta.

VII. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

De conformidad con los artículos 146 de la LPC y 313 del CPCM, de aplicación supletoria conforme al artículo 167 de la LPC, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la infracción atribuida a las denunciadas.

Al respecto el artículo 63 del Reglamento de la LPC literalmente establece: “Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones”. De lo anterior, se concluye que el acta de inspección de la Defensoría del Consumidor goza de **presunción de certeza**, lo cual ha sido reconocido expresamente por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia definitiva emitida en el proceso referencia 130-2006, pues por medio de la misma se ha dado fe de la situación en que fueron encontrados ciertos bienes. Además, reconoce que dicha presunción puede ser desvirtuada con prueba idónea en contrario, que demuestre inconsistencias en la misma.

A. Tomando en cuenta lo antes expuesto, corresponde valorar la prueba incorporada al presente procedimiento, consistente en:

a) “Acta para la toma de muestras de productos Preempacados” (folio 3), en la cual consta que –sobre la base de muestreo aleatorio sistemático– los delegados de la Defensoría del Consumidor seleccionaron y compraron en el establecimiento Walmart Boulevard del Ejército, propiedad de _____, S.A. de C.V., muestras del producto denominado “**Margarina Vegetal**

presentación de cuatrocientos gramos (400 g), de la marca , en su , en caja de cartón de 5 barras, con fecha de caducidad el 3/agosto/2012, fabricados por (del docmilio de Guatemala) y distribuidos por

b) Informe de pesado y de “Resultados del plan de verificación de contenido neto en margarina vegetal”, (folios 4 a 8), elaborados por la Unidad de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor, donde consta que luego de los análisis de metrología legal realizados conforme a la normativa técnica aplicable, se obtuvo como resultado: que al analizar la muestra del producto obtenido en margarina Vegetal con probióticos enriquecida con vitaminas A y D reducida en aceite 15% sin grasas trans, con una cantidad nominal de 400 g, se determinó que tres unidades presentaron errores mayores que la deficiencia máxima permitida (12 g) para esa cantidad nominal; es decir, reportaron pesos de 382.8 g, 384.6 g y 381.9 g.

c) Impresión del certificado de calibración de balanza electrónica marca Mettler Toledo modelo PB 5001-S, serie 1126051303, con número de inventario 4118-14-02005-020, emitido el día 14/06/2011, por el Laboratorio Nacional de Metrología Legal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y certificadas por la Directora de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor (folios 51 a 53).

d) Impresión de los certificados de calibración interna emitidos por el Gerente de Mantenimiento y el Asistente de Aseguramiento Metrológico, correspondientes a los análisis realizados a las balanzas electrónicas de A.: (1) marca modelo BL-6, serie 15706854, en fechas 23/12/2011, 13/12/2012, y (2) marca AND modelo EJ-6100, serie 5A2829080, en fecha 25/11/2014 (23 a 28).

e) Impresión de Diagrama de Flujo del proceso de manufactura de margarinas, margarina en barra y en tarro, de la empresa , S.A., suscrito por el Gerente de Investigación y Desarrollo (folio 29).

f) Documento sin fecha ni firma conteniendo tabla denominada “Producción de Margarina 400 gramos, de enero a agosto de 2012”, en el que se especifica el número de lote, fecha de producción, peso neto por barra, cantidad nominal, peso neto por cajilla y error individual de preempacado (folios 30 y 31), y en la que se detalla que los productos correspondientes a los lotes 12003 al 12244, producidos en el período del 03/01/2012 al 31/08/2012, presentaron errores individuales de 0g a 5 g.

B. Al respecto, este Tribunal al realizar un análisis de la prueba incorporada en el presente procedimiento hace las siguientes valoraciones:

a) De acuerdo al acta de folios 3, la Defensoría del Consumidor obtuvo en el establecimiento , propiedad de , S.A. de C.V., cinco muestras del

producto

....., de la marca, con una cantidad nominal de 400 g, que caducaban el 3/agosto/2012, distribuidos por y al analizar dichas muestras se determinó que tres unidades presentaron errores mayores que la deficiencia máxima permitida (12 g) para esa cantidad nominal; es decir, reportaron pesos de 382.8 g, 384.6 g y 381.9 g, dando como resultado ERROR T1 pues superaban la deficiencia tolerable de 12 g, información que se expone en el informe técnico elaborado por el Analista de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor (folio 4).

b) Con la certificación de calibración de balanza electrónica serie 1126051303, con número de inventario 4118-14-02005-020 (folios 51 a 53), se ha acreditado que la misma fue sujeta a pruebas de calibración el 14/06/2011; y según informa la Presidencia de la Defensoría del Consumidor (folio 50) dicha balanza *fue utilizada en la prueba de metrología de fecha 12/03/2012* en el producto objeto de denuncia, con lo que se acredita que dicho instrumento sí cumplía con las normas de metrología legal exigidas para acreditar el estudio realizado por la Dirección de Vigilancia de Mercado.

c) Con la impresión de diagrama de flujo de proceso presentada por (folios 23 a 31), se acreditó el diseño del proceso de producción de los productos objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, en el cual se incluye el pesado como el segundo paso del proceso, después de la recepción de la materia prima. Asimismo, se comprobó que las balanzas marca '.....' modelo BL-6, serie 15706854, y marca AND modelo EJ-6100, serie 5A2829080, que según manifestó la proveedora fueron utilizadas para realizar controles internos de peso de producto fueron debidamente calibradas en fechas 23/12/2011, 13/12/2012 y 25/11/2014.

d) Con el documento que contiene tabla denominada "Producción de Margarina Francedsa 400 gramos, de enero a agosto de 2012", no se logra establecer que los resultados de pesado de los productos correspondientes a los lotes 12003 al 12244, producidos en el período del 03/01/2012 al 31/08/2012, que presentaron errores individuales de 0g a 5 g, estén relacionados con los productos de la muestra, pues no se relaciona la fecha de caducidad de dichos lotes, y en el acta de folio 3 no se hizo constar el número de lote ni la fecha de producción de las muestras obtenidas por la Defensoría del Consumidor, solamente la fecha de caducidad.

VIII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

De los anteriores hechos probados con la prueba documental citada, es preciso establecer entonces, si las conductas denunciadas encajan con los elementos que configura la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC:

A. La acción de ofrecer bienes que no cumplan las normas técnicas vigentes, vincula obligatoriamente el análisis de la normativa técnica vigente y aplicable, que para el caso como ya se citó previamente es el RTCA 01.01.11:06 que en su artículo 2.12.1, define un ERROR T1 como: "un

preempacado no conforme que se determina que contiene una cantidad real menor que la cantidad nominal menos la tolerancia de deficiencia permitida (...)

Ahora bien, para determinar si una muestra de productos cumplen o no con lo exigido en el RTCA 01.01.11:06, han de tomarse en cuenta los criterios del numeral 4.1.1. de dicha normativa técnica, en el que se establece que un lote de inspección es aceptado si se cumple y satisface con los siguientes parámetros:

- a) Que no existan productos con error promedio;
- b) **Que no hayan preempacados no conformes con Error T1;** y,
- c) Que se rechace el lote si hay uno o más preempacados no conformes con Error T2.

Finalmente, el mismo numeral 4.1.1. en comento, estipula que un lote de inspección debe ser *“rechazado si no satisface uno o más de los requisitos.”*

En ese sentido, las muestras de los productos que fueron objeto de análisis **no satisfacen lo contenido en la letra b) de los requisitos del artículo 4.1.1. del RTCA 01.01.11:06, por lo que los lotes de inspección deben rechazarse por incumplir uno de los criterios establecidos;** en consecuencia, no cumplen con la reglamentación técnica vigente que establece los requisitos de contenido neto en productos preempacados.

B. La proveedora **_____** incorporó prueba documental con la que se acreditó el flujo del proceso de producción de los productos objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionatorio y que en dicho proceso hay una fase de pesado del producto antes de procesar la materia prima. No obstante, el 12/03/2012 la Unidad de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercado realizó una verificación de contenido neto en 5 muestras de productos terminados, encontrando en tres unidades de la muestra ERROR T1, como se ha señalado anteriormente, las cuales fueron encontradas a disposición de los consumidores en el establecimiento comercial **_____**, propiedad de la proveedora **_____**, S.A. de C.V., quien no incorporó prueba al presente procedimiento que desvirtuara los resultados de la verificación de contenido neto en Margarina Vegetal realizada por la Defensoría del Consumidor, con lo que se concluye que al momento de realización de la inspección en el referido establecimiento comercial (folio 3), los productos objeto de análisis no contaban con el peso permitido de acuerdo a la normativa técnica ya citada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y sobre la base de la prueba aportada, dado que las proveedoras denunciadas no incorporaron prueba de descargo al presente procedimiento que desacreditara los hechos establecidos con las pruebas de cargo presentadas por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, documentos que adquieren total certeza por no haber sido desvirtuados por algún medio probatorio por parte de las denunciadas, se concluye entonces que 3 de las muestras de los referidos productos “Margarina Vegetal **_____**

de la marca , con una cantidad nominal de 400 g, ofrecidos a los consumidores no cumplen la normativa técnica especial para el contenido neto de los productos preempacados, lo cual configura la infracción al artículo 43 letra f) de la LPC.

C. Ahora bien, es necesario analizar la responsabilidad de las denunciadas por la infracción antes mencionada:

1. La proveedora . S.A. se constituye como *distribuidor* de los alimentos, tal como consta en el acta de inspección y en el informe de verificación de contenido neto en margarina vegetal antes citados. En ese sentido, no consta en el presente procedimiento que . S.A. ofrezca, ponga a disposición de los consumidores o comercializa directamente en un establecimiento abierto al público los productos objeto de hallazgo, por lo que su actuar no encaja en la conducta tipo descrita en el artículo 43 letra f) de la LPC, sin perjuicio de su responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos metrológicos del producto preempacado objeto de análisis, conforme a lo dispuesto en el número 3 del RTCA 01.01.11:06; por tanto, no se establece la responsabilidad de . S.A. en la referida infracción.

2. La proveedora . S.A. de C.V. se constituye como comercializadora al detalle de los productos preempacados, tal como consta en las actas de inspección, en virtud de ser ofrecidos los productos objeto del hallazgo dentro de un establecimiento de su propiedad, conducta que ha sido comprobada y que es objeto de reproche jurídico de acuerdo a la LPC, incurriendo así en la conducta descrita en el artículo 43 letra f) de la referida ley.

Además, desde el momento en que los productos en cuestión eran ofrecidos a los consumidores en un establecimiento propiedad de la proveedora denunciada, éstos debían cumplir imperativamente con las normas técnicas (número 3 del RTCA 01.01.11:06), por lo que es obligación de la comercializadora verificar que los productos preempacados que pondrá a disposición de sus clientes, no presenten incumplimientos a la normativa de consumo ni a la reglamentación técnica, y garantizar así que en sus establecimientos solamente se encuentre productos que están aptos para ser comercializados.

Finalmente, se advierte que aun cuando no haya existido dolo de parte de . S.A. de C.V. en incumplir con los mandatos contenidos en la ley de la materia y en la normativa técnica, en múltiples ocasiones se ha establecido que las infracciones administrativas son sancionables por culpa, la cual, en el presente caso queda evidenciado por la falta de esmero y diligencia por parte de .

S.A. de C.V. en verificar que los productos cumplieran con las exigencias de las normas técnicas previo a ser ofrecidos a los consumidores.

IX. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Habiéndose comprobado que la proveedora . S.A. de C.V. cometió la infracción dispuesta en el artículo 43 letra f) de la LPC, es procedente la imposición de la sanción prevista en el art. 46 de la LPC, según los parámetros establecidos en la ley en mención.



Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, debe considerarse que la proveedora S.A. de C.V., una empresa de gran tamaño, es propietaria del establecimiento inspeccionado, en el que se ofrecían y comercializaban los productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica vigente y en los que se ha comprobado la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC; por cuanto el verbo rector de la conducta infractora es precisamente «ofrecer» y por tanto debió atender las exigencias y requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y normativas técnicas, con la finalidad de asegurarse y poner a disposición de sus clientes productos confiables tanto en calidad como en cantidad y con información completa, veraz, accesible y oportuna.

Por otra parte, la conducta de la denunciada provoca un detrimento del derecho a la información de los consumidores, e incluso un posible perjuicio económico al adquirir productos con menor cantidad a aquella por la cual pagaron, pues si bien no se ha comprobado un daño a una persona en particular, se ha valorado que la tutela del bien jurídico protegido en el presente caso es de interés difuso, en razón de ofrecerse los productos consignados en el acta de mérito (folio 3), que no cumplían con la reglamentación técnica relacionada; así como el hecho de que incurrió en tales inobservancias a la ley y reglamentación técnica por haber actuado de forma culposa, no teniendo el debido cuidado ni diligencia para verificar que los productos que ofrece y son puestos a disposición de los consumidores atendieran los referidos requerimientos.

X. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14 y 101 inciso 2º, de la Constitución de la República; 27, 40, 43 letra f), 46, 49, 83 letra b), 97, 146, 147 y 149 de la Ley de Protección al Consumidor; y los artículos 3.2. y 4.1.1. literal b) del RTCA 01.01.11:06, este Tribunal **RESUELVE**:

a) *Absolver* a la proveedora S.A., por la supuesta comisión de la infracción contemplada en el artículo 43 letra f) de la LPC.

b) *Sancionar* a la proveedora S.A. de C.V., con la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$657.90)**, equivalentes a *tres salarios mínimos mensuales urbanos en la industria* (según Decreto Ejecutivo N° 56 del 6 de mayo de 2011, publicado en el Diario Oficial N° 85, Tomo 391, de la misma fecha, vigente al momento de la comisión de la infracción), en concepto de multa por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC (D.L. N° 776 del 31/8/2005, vigente al momento en que ocurrieron los hechos), por ofrecer bienes que no cumplen las normas técnicas vigentes.

Dicha multa deberá hacerse efectiva en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, dentro de los **diez días siguientes al de la notificación de esta resolución**, debiendo

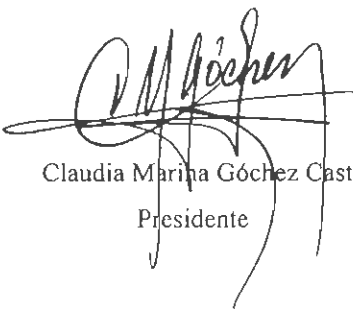
comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.

Notifíquese.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

De conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: *“Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.”*; en relación con el artículo 158 n° 5 del mismo cuerpo normativo: *“La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)”*.

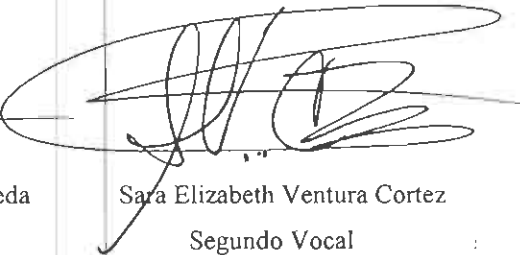
PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.



Claudia Marina Góchez Castillo
Presidente



Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer Vocal



Sara Elizabeth Ventura Cortez
Segundo Vocal



Secretario Tribunal Sancionador

B

